

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 23° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-1177-2016  
CARATULADO : MUÑOZ / MADESA S.A

Santiago, dieciocho de Octubre de dos mil diecisiete

Vistos,

A fojas 1 comparecen don Aliro Fernando Muñoz Marchant, empleado; doña Clara de las Nieves Sepúlveda Osorio, labores de casa; doña Olga de las Nieves Muñoz Sepúlveda, empleada; doña Jennifer Macarena Muñoz Sepúlveda, empleada; don Christopher Alberto Muñoz Sepúlveda, empleado; doña Yanet del Carmen Ravelo Fernández, empleada, en representación de su hijo menor de edad Tomás William Muñoz Ravelo; y doña Carolina Beatriz Ramírez Orias, empleada, en representación de su hija menor de edad Catalina Antonia Muñoz Ramírez; todos con domicilio para estos efectos en calle Agustinas N° 681, oficina 609, comuna de Santiago, quienes vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Madesa S.A., empresa del giro industrial y comercial, representada por su gerente general don Alejandro Miralles Guthmann, empresario, ambos con domicilio en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N° 9431, comuna de Quilicura.

Fundamentan su demanda en que con fecha 30 de julio de 2015, alrededor de las 17 horas, don José Arturo Muñoz Sepúlveda, quien trabajaba en la planta industrial de Madesa S.A., en labores de lijado y pintura interior y exterior de la planta para las cuales se contrató a su empleadora “Empresa Para La Minería, La Industria Y Construcción Ltda.”, pequeña contratista de obras menores, en labores de desmanche, imprimante y pintura interior y exterior de muros en altura, realizadas para la dueña de la obra y demandada de autos, en el lugar que le sirve a ésta de domicilio.

Refieren que el señor Muñoz realizaba dicha tarea en compañía de don Manuel López, sin ningún tipo de supervisión directa. El día y hora señaladas previamente, fueron izados por medio de una máquina de brazo hidráulico articulado de grandes dimensiones, quedando aprisionados al topar ascendiendo con una viga metálica ubicada en altura por sobre el canastillo en que se encontraban los trabajadores, resultando aplastados. Indican que don José Arturo Muñoz Sepúlveda quedó atrapado entre la viga y el canastillo, siendo su espalda presionada con tal fuerza que falleció en el lugar, debiendo cortarse la viga metálica para poder retirar su cuerpo. Con posterioridad se produjo también el deceso de don Manuel López.

Alegan que la labor era realizada sin supervisión e instrucciones por parte de su empleador directo y del dueño de la obra. Señalan que el señor Muñoz ejecutaba labores de alto riesgo, ya que lo eran en altura y haciendo uso y mecanismo de levante hidráulico de gran potencia, para la cual se debieron tomar las medidas de instrucción y



**Foja: 1**

prevención pertinentes, y jamás haberse realizado sin supervisión, lo que se traduce en condiciones de riesgo e inseguridad evidentes.

Sostienen que analizando el asunto desde distintas perspectivas, todas ellas confluyen en la responsabilidad de la demandada.

Así, desde la perspectiva del derecho común, conforme a los artículos 1437, 2314, 2329 y 2284 del Código Civil, quien provoca un daño, está obligado a indemnizar. Cita además lo dispuesto en el artículo 2317.

Luego, se refieren a la culpa en la organización, lo que se verifica cuando la conducta empresarial infringe inequívocamente un deber de cuidado genérico, el que no se radica en un agente específico, sino directamente en la función. En este caso se invoca la culpa del empresario por el mal funcionamiento del servicio, lo que distinguen de la culpa por el hecho de los dependientes. Explican que por razones de diversa índole, se encarga a terceros el cumplimiento de las obligaciones propias en la ejecución de una obra, siendo lógico que a consecuencia de ello, actualmente se considere que el empresario puede ser civilmente responsable por los hechos del contratista, si se prueba que este último y su personal forma parte de la organización empresarial del primero al momento de causarse el daño. Afirma que esto se ajusta a los hechos precedentemente descritos. Hace presente que en materia de responsabilidad civil extracontractual, la culpa no admite graduación.

Luego, alegan la existencia de culpa infraccional, referido a normas reguladoras de orden público. Indican que la regulación de las actividades laborales explicita el deber de protección o seguridad del empleador para con sus trabajadores, lo que debe ser entendido en forma amplia, considerando a la mandante y beneficiaria. Precisan que la normativa tiene un carácter básico, que no excluye la necesidad y responsabilidad de adoptar toda otra medida requerida para ese fin.

Refieren que el señor Muñoz, de 44 años a la fecha de su muerte, ejercía labores en un ambiente riesgoso, manipulando un artefacto hidráulico, el que se transformó en una máquina mortal, lo que no correspondía a sus funciones de pintor.

Alegan que la demandada tuvo cabal conocimiento de ello y no implementó una fiscalización sobre procedimientos de trabajo seguro, no verificó que su contratista hubiese entregado capacitación adecuada, ni que contara con supervisión. En este orden de ideas, hace presente que sin perjuicio de la naturaleza de la acción, existe infracción a la legislación laboral, en especial a lo dispuesto en los artículos 183 E y 187 del Código del Trabajo; Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, en sus artículos 3°, 36 y 37; artículo 21 del Decreto Supremo N° 40 de 1969; Ley N° 16.744, en sus artículos 66, 66 bis, 67, 68 y 69, en relación a los artículos 210 y 68 del Código del Trabajo y a los artículos 8°, 14 y 21 y siguientes del Decreto Supremo N° 40.

Indican que el accidente del trabajo descrito en esta presentación no habría ocurrido si la demandada hubiera tomado las medidas y dispuesto condiciones básicas que aseguraran la no ocurrencia de accidentes, estableciendo medidas de seguridad tales como inspeccionar, revisar, supervisar y disponer mecanismos de detención del equipo en caso de emergencia, previo a iniciar la labor, además de un procedimiento de trabajo seguro, con supervigilancia de las tareas encomendadas.

Tras explicar que la doctrina entiende la culpa infraccional como la contravención de los deberes de cuidado establecidos por el legislador u otra autoridad con potestad normativa, agregan que la ilegalidad de una conducta lleva implícita la culpa.



Foja: 1

A continuación, se refieren a la carga de la prueba citando lo dispuesto en los artículos 2329 y 1698 del Código Civil. Sostienen que la evolución jurisprudencial y doctrinaria ha llevado concluir que el primero de estos artículos establece una regla de presunción de culpa que favorece a la víctima en casos que involucran una situación peligrosa o un deber de seguridad. En este sentido, indican que la culpa infraccional lleva a una alteración evidente del onus probandi, recayendo en la demandada, quien debe probar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, toda vez que se presume legalmente que ésta debe actuar diligentemente.

En cuanto a la causalidad, señalan que la responsabilidad por culpa infraccional exige que exista una conexión de ilicitud entre la norma que se supone infringida y el daño que ésta persigue prevenir. En el caso de marras, manifiestan que son las normas de prevención de riesgos que se desarrollan desde un punto de vista de la gestión laboral, cuyo fin es evitar accidentes como el que provocó la muerte de don José Arturo Muñoz Sepúlveda.

Respecto a los perjuicios e indemnizaciones derivadas del accidente, sostienen haber sufrido un grave daño de carácter permanente, consistente en el dolor y afección personal que ha sufrido cada uno ante una muerte horrorosa e inesperada. Destacan que la víctima sólo tenía 44 años a la época de su muerte, cursando sólo estudios básicos y dedicándose a su trabajo, vinculado a la jardinería, siendo una persona sana, vital, responsable y empeñado en progresar, logrando dar a su familia la estabilidad de la que se ha visto privado en la infancia, y dedicando su amor a sus cercanos.

Tras detallar la relación con el difunto y cómo se han visto afectados en lo personal por su pérdida, manifiestan que el vínculo de parentesco hace suponer la depresión, dolor o angustia en que se traduce el daño moral invocado.

Cifran el daño moral en las siguientes sumas:

- a) Respecto de don Aliro Muñoz Marchant y doña Clara Sepúlveda Osorio, padres de la víctima, la suma de \$80.000.000.- para cada uno.
- b) En cuanto a los señores Olga, Jennifer y Christopher, todos de apellidos Muñoz Sepúlveda, hermanos de la víctima, la suma de \$60.000.000.- para cada uno.
- c) Respecto a los hijos menores de edad, Tomás Muñoz Ravelo y Catalina Muñoz Ramírez, la suma de \$120.000.000.- para cada uno.

Solicita en definitiva, tener por interpuesta la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra de Madesa S.A., ya individualizada, acogerla, y en definitiva condenar a la demandada al pago de las sumas antes señaladas por el daño moral causado, y en subsidio, la sumas mayores o menores que determine el tribunal de acuerdo a derecho y al mérito del proceso; con intereses corrientes para operaciones no reajustables desde la fecha de la demanda hasta el pago efectivo o en subsidio, los reajustes e intereses que fije el tribunal contados desde la notificación de la demanda o desde la fecha que la Magistratura determine; o, en subsidio, condenar según proceda en derecho a las sumas y en la forma que el tribunal determine según el mérito de autos, derecho y justicia, con los reajustes e intereses que se estimen procedentes; con costas.

A fojas 21 se tuvo por interpuesta demanda y se confirió traslado a la demandada.

A fojas 28, comparece don Clemente Dougnac Mujica, abogado, en representación convencional de Madesa S.A., quien se notifica expresamente de la demanda, además de deducir excepción dilatoria, la que fue rechazada a fojas 43.



**Foja: 1**

A fojas 52 el apoderado de la demandada ya individualizado, viene en contestar la demanda interpuesta en su contra, solicitando que sea rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En primer lugar, destaca que la demanda no se dirige contra el empleador del trabajador, sino que respecto a un tercero, que contrató los servicios de una empresa especializada en trabajos que están fuera de la labor de su representada, hecho que incide en la normativa aplicable y en el régimen de responsabilidad por el que responde, debiendo exculparse de la indemnización que se pretende.

Sostiene que las teorías invocadas por la contraria, exculpan de responsabilidad a una empresa que no detenta la calidad de empleador del fallecido, y que desplegó todas las acciones preventivas de minimización de riesgo que establece la ley. En este sentido indica que no puede atribuírsele responsabilidad a quien no dirige la organización empresarial que ha cometido un error, no se beneficia del riesgo creado y no ha cometido infracción alguna a las leyes y reglamentos, señalando que el sumario administrativo realizado por la SEREMI de Salud rechaza categóricamente la responsabilidad de Madesa en el accidente.

Señala que Madesa contrató a Politecnia Ltda., desconociendo si la empleadora de la víctima aludida en la demanda corresponde a la que realizó los trabajos que suscitan el presente juicio, siendo un hecho no controvertido que el fallecido no prestaba servicios a Madesa, pese a lo cual se le atribuye a su representada el incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones de higiene y seguridad a los que están sujetos los empleadores en virtud de la normativa del Código del Trabajo. Alega que dicho argumento carece de sustento jurídico y fáctico, señalando que cumplió cabalmente los requerimientos de seguridad que le son exigibles, los que evidentemente son distintos a los que corresponden al empleador.

Añade que los actores aseveran hechos falsos al señalar que Madesa no adoptó medidas mínimas de seguridad y no implementó una fiscalización sobre procedimientos de trabajo seguro, no verificó que el contratista hubiese dado la capacitación adecuada, ni que contara con supervisión. Manifiesta que éstos fueron descartados por la Resolución N° 0533 de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, en la que se exculpa a su representada. Precisa que el brazo hidráulico utilizado corresponde a un equipo marca JLG modelo 450 A, cuyo uso no constituye un riesgo evidente, siendo idóneo para el trabajo.

Arguye además que los actores pretenden que se les aplique un régimen probatorio más favorable, en contravención al principio de igualdad entre las partes, lo que a su juicio demuestra la falta de fundamento de la acción.

Asimismo, acusa que la demanda no justifica los supuestos daños a indemnizar, al no establecer parámetros para determinar los perjuicios que se reclaman.

Expone que Madesa se dedica a la fabricación y comercialización de adhesivos de alta calidad, siguiendo elevados estándares. Por ello, para la realización de tareas básicas de mantención de sus instalaciones, requieren contratar empresas externar especializadas en las tareas que están fuera de su rubro, a fin de evitar los eventuales riesgos a que se ven expuestos sus operarios.

Explica que el accidente no se debió a negligencia de su representada, según consta en Resolución N° 0533 del 22 de enero de 2016 de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, en que se estableció que Madesa actuó diligentemente en todo lo referido a las faenas encomendadas a Politecnia Ltda. Arguye que siendo un tercero, no se le puede exigir el mismo estándar de diligencia que al empleador directo, recayendo en este



**Foja: 1**

último el deber de cuidado de sus trabajadores. Insiste en que las víctimas realizaban trabajos de mantenimiento, pintura y arreglo de ventanas en el galpón de la planta de producción, tareas que están fuera del giro de la empresa. Por ello, indica que no le son aplicables las normas de subcontratación del Código del Trabajo, sino las del derecho común de daños, toda vez que no se trata de labores de carácter permanente, sino que se circunscribían a tareas de mantenimiento fuera del giro.

Sin perjuicio de lo señalado, precisa que los trabajadores contaban con los implementos de seguridad necesarios para realizar las labores solicitadas. Explica que Madesa no era responsable de la realización de las tareas encargadas, pues ya había cumplido su deber de minimizar los riesgos de su personal al encomendar la tarea a una empresa especializada en dichas funciones. Por lo tanto, manifiesta que los actores erraron al demandar a Madesa, ya que aunque el accidente se dio en sus dependencias, los trabajadores no prestaban servicios para ésta.

Expone que la responsabilidad de Madesa se limita a fiscalizar ex ante que la empresa cuente con un plan de trabajo que incorpore y se haga cargo de las variables de seguridad conforme a la tarea encomendada, lo que se cumplió a cabalidad. Añade que tampoco corresponde a su representada intervenir o sustituir a Politecnia Ltda. en la ejecución de las labores encomendadas, toda vez que dicha empresa es la que cuenta con la experiencia y conocimiento para su realización.

Manifiesta que no existen deficiencias en materia de higiene y seguridad, lo que se encontraría acreditado por la autorización de trabajo, documento en que se solicita a la empresa contratada la identificación del jefe de obra y la empresa de seguridad a la que está adscrito, nivel de riesgo del trabajo, estableciendo la inducción de seguridad en forma obligatoria, además de identificar a los trabajadores y la forma en que debía llevarse a cabo la labor; la evaluación de riesgos por grupo, respecto del cual hace presente que se cortaron las vigas del sector donde se efectuaría el trabajo, para evitar el riesgo de aprisionamiento; y certificado de charla de inducción respecto al brazo hidráulico utilizado.

Relata asimismo que Politecnia Ltda. contrató el equipo con ATS Maquinarias Limitada, precisamente a fin de disminuir el riesgo de caída, en comparación al uso de andamios. Señala que de acuerdo a la certificación de ATS, la máquina cuenta con todos los sistemas de seguridad para poder trabajar en altura máxima, pudiendo desplazarse con todos sus brazos extendidos, sin ningún tipo de peligro para el trabajador, señalándose además que al desplazarse en altura, “el equipo automáticamente acciona el dispositivo de seguridad que hace que traccione en forma lenta”, todo lo cual ocurrió en la especie. Enfatizan además que la determinación de la posición del equipo fue realizada por ATS Maquinarias.

Luego señala que la normativa invocada por la contraria no permite establecer una obligación de indemnización por parte de Madesa, toda vez que se pretende aplicar el estatuto de responsabilidad extracontractual interpretándolo conforme a la normativa del Código del Trabajo. Aduce que los preceptos invocados son improcedentes e inaplicables al caso de marras, dado que su representada no ha realizado ninguna acción u omisión imputable a dolo o culpa o que tenga el carácter de antijurídica.

Respecto a la aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual, insiste en los argumentos expuestos, destacando que no se observa dolo o culpa por parte de Madesa, la que además, siendo un tercero extraño a las relaciones del señor Muñoz con Politecnia, no existe relación causal entre los daños y su representada. En cuanto a los restantes criterios de atribución de responsabilidad, señala que la culpa infraccional debe



«RIT»

**Foja: 1**

descartarse, toda vez que la Resolución N° 0533 de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana absolvió a Madesa de los cargos en su contra.

En cuanto al daño reclamado, indica que Madesa no causó daño alguno a los demandantes, por lo que no puede imputársele el daño moral reclamado, siendo carga de los demandantes probar que éste asciende a las sumas demandadas, las que tienen un fin más cercano a la pena civil que a la reparación de perjuicios por la pérdida sufrida, lo que se demuestra por el hecho que no han demandado al supuesto responsable principal, esto es, Politecnia Ltda.

A fojas 67, se tuvo por contestada la demanda y se confirió el traslado para la réplica.

A fojas 69, don Alejandro Mujica Abarca, abogado, por la parte demandante, evacúa la réplica, señalando respecto a la falta de legitimación pasiva reclamada por la contraria, que ésta se desentiende del hecho de ser dueña de la obra, mandante y beneficiaria de los trabajos que se ejecutaban, lo que se ajusta a las diversas argumentaciones que fundan la demanda. Agrega que la propia parte ha confesado que desconocía si la empresa a la que se aludía en la demanda corresponde a la que realizó las labores, lo que demuestra su falta de fiscalización al respecto.

En cuanto a la exculpación por los organismos administrativos competentes, indica que es materia de prueba que recae sobre la demandada. Lo mismo ocurre con la diligencia con la que dice haber actuado. Respecto a los cuestionamientos sobre el onus probandi, invoca lo establecido por la jurisprudencia, indicando que quien por ley está obligado a cumplir requerimientos es quien debe acreditar su verificación.

Por último, respecto a la aplicabilidad de la legislación invocada, señala que el ordenamiento debe interpretarse de modo sistémico, fundándose en la responsabilidad en lo dispuesto en el Código Civil, lo que se ve ratificado y especificado en la normativa laboral.

A fojas 71 se tuvo por evacuado el trámite de la réplica, confiriéndose traslado para la dúplica.

A fojas 72, don Clemente Dougnac Mujica, abogado por la demandada, evacúa el trámite de la dúplica, reiterando y profundizando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda.

A fojas 79, se tuvo por evacuada la dúplica y se citó a audiencia de conciliación.

A fojas 81, consta haberse realizado audiencia de conciliación, sin que las partes arribaran a acuerdo.

A fojas 87, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

A fojas 306, atendido el estado procesal de la causa, se citó a las partes a oír sentencia.

## **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

### **I. En cuanto a las tachas.**

**Primero:** Que a fojas 115, la demandada viene en tachar a la testigo doña Susana María Saunders González, por la causal del numeral 7° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que ésta declaro tener una relación de amistad con la parte que lo presenta.

Que evacuando el traslado conferido, la parte demandante se opone a la tacha, pues de las declaraciones de la testigo no puede deducirse una amistad en calidad de íntima, lo que la testigo ha desmentido expresamente.



Foja: 1

**Segundo:** Que a fojas 128, la demandada viene en tachar al testigo don Jorge Alejandro González Sánchez, por la causal del numeral 7° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que ésta declaro tener una relación de amistad con uno de los actores, en calidad de íntima según se desprende de las visitas, amistades que mantienen en común, de los cuales se deriva que hay una relación permanente y que importa un sesgo en su eventual declaración.

Que la contraria, al evacuar el traslado, pide el rechazo de la tacha, dado que de los dichos del testigo no se deriva que exista íntima amistad, sino más bien una relación superficial derivada del vínculo laboral entre el testigo y uno de los demandantes.

**Tercero:** Que la inhabilidad alegada en ambos casos es la del numeral 7° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, referida a la existencia de íntima amistad entre el testigo y la parte que lo presenta, hecho que no puede deducirse de las respuestas de doña Susana María Saunders González, quien si bien reconoce ser amiga de una de las demandantes, producto de la vecindad, ha dicho expresamente que ésta no tiene carácter de íntima, sin que existan antecedentes adicionales que permitan establecerlo, por lo que la tacha a su respecto será desestimada.

Que, en cambio, en el caso del testigo don Jorge Alejandro Muñoz Sepúlveda, la misma tacha será acogida, teniendo presente que de sus dichos se observa una relación de amistad más estrecha, por cuanto asume que lo visita en su domicilio, que pertenecen a un círculo de amigos en común, además de señalar que “comparten cosas”, aspectos que denotan una familiaridad que excede a la de simples conocidos o a una amistad superficial.

Que en ambos casos no se condenará en costas a la parte perdedora por haberse litigado con motivo plausible.

**Cuarto:** Que a fojas 131 y 134, la demandante interpone las tachas de los numerales 4° y 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, en contra de los testigos señores Carolina Rigol Olsen y Pedro Alfonso Tapia Gavidía, fundado en que han declarado ser empleados y recibir remuneraciones de la demandada, lo que denota su calidad de dependiente, además de tener un interés pecuniario indirecto, pues su puesto de trabajo puede verse afectado por la presente diligencia y asimismo involucrar una declaración poco objetiva.

Que la demandada, evacuando los traslados conferidos, pide el rechazo de las tachas. Respecto a la del numeral 4°, dice que la demandante no ha probado ni ofrecido probar el vínculo de subordinación o dependencia exigido por la norma. Añade que la legislación laboral contempla garantías para que el trabajador desarrolle sus funciones con independencia, por lo que no hay motivo para temer sobre su imparcialidad. En cuanto a la del numeral 6°, sostiene que el patrimonio de los testigos no se verá afectado por los resultados del juicio, por lo que no se configura la causal invocada.

**Quinto:** Que a fojas 137, la demandante deduce idénticas tachas respecto de doña Liliana Karen Varas Tapia, fundando la del numeral 4° en que se desprende de la declaración de la testigo que ésta mantiene una relación de subordinación y dependencia con Madesa. En cuanto a la del N° 6, señala que por ser contratada y recibir remuneración de la demandada, carece de la imparcialidad necesaria, pudiendo deducirse su interés en que su empleador gane el juicio.

Que, evacuando el traslado, la demandada pide se rechacen las tachas deducidas. Respecto de la del N° 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, señala que no se cumplen los presupuestos fácticos para su procedencia, pues se pretende establecer una inhabilidad derivada del vínculo de subordinación y dependencia del testigo,



«RIT»

**Foja: 1**

situación contemplada en el numeral 5° de la norma en comento, a la que la demandante no ha hecho referencia. Asimismo, reitera los argumentos señalados en el considerando anterior. La defensa de la tachas del N° 6 se funda en las mismas alegaciones ya consignadas respecto a las tachas en contra de los señores Rigol y Tapia.

**Sexto:** Que en cuanto a las tachas fundadas en el numeral 4° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que los testigos han declarado abiertamente que su empleador es Madesa S.A., motivo suficiente para acoger las tachas, en razón de ser dependientes de la parte que los presenta, pues sin perjuicio de la inhabilidad contemplada en el número 5° del mismo artículo, éstos igualmente se encuentran comprendidos en la tachas invocada. De igual modo, cabe señalar que los avances en materia de legislación laboral no autorizan al tribunal de prescindir de las inhabilidades dispuestas por la ley en materia civil, y que han sido oportunamente reclamadas por los demandantes.

Que, en cambio, se rechazarán las tachas fundadas en el numeral 6° del mismo artículo por no desprenderse de las preguntas de tachas, que los testigos puedan verse afectados personalmente por el resultado del proceso.

Que habiéndose acogido parcialmente las tachas deducidas, cada parte soportará sus costas.

## **II. En cuanto al fondo del asunto debatido.**

**Séptimo:** Que a fojas 1, comparecen don Aliro Fernando Muñoz Marchant; doña Clara de las Nieves Sepúlveda Osorio; doña Olga de las Nieves Muñoz Sepúlveda; doña Jennifer Macarena Muñoz Sepúlveda; don Christopher Alberto Muñoz Sepúlveda; doña Yanet del Carmen Ravelo Fernández, en representación de su hijo menor de edad Tomás William Muñoz Ravelo; y doña Carolina Beatriz Ramírez Orias, en representación de su hija menor de edad Catalina Antonia Muñoz Ramírez, todos ya individualizados; quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Madesa S.A., por el accidente laboral sufrido por don José Arturo Muñoz Sepúlveda, solicitando se condene a la demandada a pagar la cantidad de \$580.000.000.-, correspondiente a \$80.000.000.- para cada padre, \$60.000.000.- para cada hermano y \$120.000.000.- para cada hijo; por concepto de daño moral, más costas.

Fundan su acción en los hechos y derecho que ya fueron reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, que se dan por reproducidos para todos los efectos legales.

**Octavo:** Que a fojas 52, comparece don Clemente Dougnac Mujica, abogado, en representación de Madesa S.A., quien contesta la demanda, solicitando su rechazo, con costas, fundando sus alegaciones en los hechos y el derecho que ya fueron expuestos latamente en lo expositivo de esta sentencia.

**Noveno:** Que, en su escrito de réplica y dúplica, las partes reiteraron las alegaciones y fundamentos desarrollados en la demanda y contestación, respectivamente.

**Décimo:** Que, de acuerdo a los argumentos expuestos y las peticiones formuladas en el libelo, la acción promovida por la actora corresponde a la de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual respecto de la demandada, la que se tramitó de conformidad a las normas del procedimiento ordinario de mayor cuantía, previstas en los artículos 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Que el derecho a la indemnización por daño moral que dice haber sufrido el actor y cuyo reconocimiento demanda, debe determinarse con arreglo a las normas del derecho común. De esta manera, para determinar si procede o no declarar el derecho que se demanda, se requiere: a).- que el autor sea capaz de delito o cuasidelito; b).- que





**Foja: 1**

exista un hecho culposo o un cuasidelito propiamente tal, que sea imputable a la parte demandada; c).- que este hecho culposo haya causado un perjuicio o daño a la parte demandante; d).- que entre el hecho doloso o culposo y el perjuicio producido haya una relación de causalidad, esto es, que los daños o perjuicios sufridos por la víctima sean una consecuencia inmediata y directa de aquél.

**Undécimo:** Que de acuerdo al mérito de las acciones y defensas esgrimidas por las partes en sus escritos del período de discusión, la litis quedó configurada de modo tal que las partes debieron allegar al proceso las probanzas correspondientes, a fin de acreditar los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:

1.- Pormenores y circunstancias en las cuales se produjo el accidente de don José Arturo Muñoz Sepúlveda, el día 30 de julio de 2015.

2.- Efectividad de detentar legitimación pasiva la demandada en los presentes autos.

3.- Cumplimiento por parte de la demandada, de las medidas de seguridad exigidas al momento de producirse el accidente que causa el fallecimiento de don José Arturo Muñoz Sepúlveda.

4.- Existencia de perjuicios ocasionados por el actuar y/o negligencia de la demandada. En su afirmativa, naturaleza y montos de los mismos.

**Duodécimo:** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil corresponde al actor acreditar íntegramente los fundamentos de su demanda, en especial, la existencia de un delito o cuasidelito civil cometido por las demandadas, los daños sufridos y la relación entre los hechos ilícitos y los perjuicios.

**Décimo tercero:** Que a fin de acreditar sus alegaciones, la demandante rindió la siguiente documental: 1) Certificado de defunción de don José Arturo Muñoz Sepúlveda; 2) Certificados de nacimiento de los demandantes y de don José Arturo Muñoz Sepúlveda; 3) Copia autorizada de carpeta investigativa RUC N° 1500735757-2; 4) Copia de antecedentes asociados a la fiscalización N° 1323/2015/1965 de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco.

Que los documentos acompañados fueron además entregados en formato digital, en CD guardado en custodia N° 82-2017.

Que, asimismo, rindió prueba testimonial, declarando doña Susana María Saunders González, doña María Elena Salazar Falcón y don Manuel Alberto Celis Robledo.

Que, finalmente, a su petición se designó perito psicólogo a don Juan Labbé Jeira, quien evacuó su informe a fojas 288, respecto de don Aliro Muñoz Marchant y doña Clara Sepúlveda Osorio.

**Décimo cuarto:** Que, a su turno, la demandada aportó la siguiente documental: 1) Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial otorgado a don Clemente Dougnac Mujica, del 23 de octubre de 2015; 2) Copia de sentencias rol N° 8348-2015 y 7378-2016 de la Excelentísima Corte Suprema; 3) Copia de sumario sanitario N° 3461-2015 de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana; 4) Copia de certificado de charla de inducción emitida por el Departamento Técnico de Maquinarias ATS; 5) Copia de autorización de trabajo emitida por Madesa respecto a “reparación de fallada planta productiva Madesa” (sic); 6) Copia de Evaluación de riesgos por grupo, correspondiente a reparación de ventanas y fachada de planta Madesa, del 23 de julio de 2015; 7) Copia de recepción de Reglamento Interno de la empresa, presentado ante la Inspección comunal del Trabajo Norte Chacabuco, de fecha 20 de noviembre de 2014;



**Foja: 1**

8) Copia del Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad, actualizado al 15 de octubre de 2014; 9) Copia de Actas del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, N° 14 a 34; 10) Copia de Registro de Charlas de 5 minutos del 23 de marzo de 2015 al 29 de julio de 2016; 11) Copia de acuerdo de colaboración, período 2015-2016, suscrito con la Asociación Chilena de Seguridad; 12) Copia de informes académicos de seguridad de la Asociación Chilena de Seguridad del 6 de enero de 2014, 23 de marzo de 2016 y 16 de mayo de 2016; 13) Informes técnicos emitidos por la Asociación Chilena de Seguridad N° 201207032130, 222477, 20131107909; 14) Copia de contrato de trabajo de don José Arturo Muñoz Sepúlveda con Empresa para la minería, la industria y la construcción Ltda.; 15) Copia de carta de presupuesto emitida por Polytecnia Ltda. para Madesa S.A.; 16) Copia de identificación de peligros del 23 de julio de 2015.

Que además, declaró por su parte en calidad de testigo don Alejandro Palma Pequeño.

**Décimo quinto:** Que en relación al primer punto de la interlocutoria de prueba, de la prueba aportada al juicio, así como de las aseveraciones de las partes en sus diversas presentaciones, es dable establecer lo siguiente:

- a) Madesa S.A. contrató con Polytecnia Ltda. los servicios de desmanche, imprimado y pintura interior y exterior de su planta ubicada en la comuna de Quilicura, la que había sufrido un incendio, documentado en la orden de compra N° 3756 allegada por la demandada.
- b) Polytecnia Ltda., nombre de fantasía de Empresa para la Minería, la Industria y la Construcción Ltda., según consta de escritura de modificación de sociedad del 3 de julio de 2015, repertorio N° 6.768-2015 del Notario Público don Cosme Gomila Gatica, contenido en el sumario sanitario respectivo; contrató como pintor a don José Arturo Muñoz Sepúlveda, a partir del 24 de julio de 2015, hasta el término de la obra.
- c) De acuerdo a los diversos antecedentes de la carpeta investigativa y tal como reconocen las partes, el 30 de julio de 2015, alrededor de las 17 horas, mientras don José Arturo Muñoz Sepúlveda y don Manuel Iván López Gajardo trabajaban en labores de pintura en altura en el patio exterior de Madesa, el brazo hidráulico que utilizaban para elevarse se desvió de trayectoria, en dirección a una de las vigas metálicas ubicadas en el techo, contra la cual son aplastados, provocando la muerte en el mismo lugar del señor Muñoz, por asfixia por compresión torácica interna, y posteriormente la del señor López por hemotórax bilateral por trauma torácico, de acuerdo a autopsia practicada por el Servicio Médico Legal el 31 de julio de 2015.
- d) La maquinaria utilizada correspondía a un elevador de pluma articulada de dos ejes, marca JLG, modelo 450 AJ serie II, de propiedad de ATS Maquinarias, que realizó charla de inducción para uso de la máquina al señor Muñoz el día anterior al accidente, según consta en el certificado de inducción extendido por esta empresa.
- e) De acuerdo a lo determinado en Informe pericial mecánico N° 382 agregado a la carpeta investigativa en sede penal, la torreta de la máquina estaba girada en 180°, por lo que los controles de desplazamiento funcionaban al revés del uso normal, lo que se suma a su vez al cambio de posición del joystick que permitía mover la plataforma, lo que llevó a que los trabajadores se acercaran más a la viga en vez de alejarse de ella.



Foja: 1

- f) Conforme a las investigaciones en sede penal y administrativa, consta que al momento del accidente, el encargado de obra de Polytecnia Ltda., don Alejandro Hernán Ruminado Mardones, no se encontraba supervisando a los trabajadores, llegando posteriormente al lugar, sin poder controlar la máquina, la que se había trabado.

**Décimo sexto:** Que, en vista de que en autos ha sido alegada por la demandada, la excepción de falta de legitimación pasiva, primeramente, por razones de economía procesal, y antes de entrar de lleno en el conocimiento de los demás hechos, hemos de centrarnos en la resolución de la mentada excepción.

Que, en relación a ésta, contenida en el segundo punto de prueba, Madesa S.A. ha desconocido ser empleadora de la víctima, aduciendo que precisamente contrató a Polytecnia Ltda. por tratarse de actividades fuera de su giro comercial.

**Décimo séptimo:** Que, para resolver esta disyuntiva, debe tenerse en consideración que la acción incoada es de carácter civil, y que además, ha sido interpuesta por los parientes de la víctima, por el daño moral propio que han sufrido a raíz de la muerte de don José Arturo Muñoz Sepúlveda.

Que en tal calidad, la acción se rige por las normas generales del Código Civil, establecidas en el Título XXXV, conforme se ha expresado en el considerando décimo, y habiéndose imputado un daño a Madesa S.A., consistente en que su eventual negligencia habría incidido en el deceso del señor Muñoz, la demanda, del modo en que se ha planteado, se ajusta plenamente a lo que exige la ley.

**Décimo octavo:** Que, cabe precisar que en ningún caso era necesario que los actores hubiesen deducido su acción además contra Polytecnia, tal como reconoció en un caso análogo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, en rol N° 216-2016, en cuyo considerando décimo tercero, en que indica: “Una cuestión es que se haya resuelto, en sede laboral, que debe demandarse al empleador directo para dirigirse en contra del mandante y una muy distinta es la pretensión, a todas luces infundada e incluso temeraria que, en sede extracontractual, habría que dirigirse en contra de todos quienes integran la cadena de subcontratación. Ninguna norma ni principio lo señalan y tan es así que los demandados no han señalado ninguna que apoye su posición.”

Que conforme a lo expresado se desechará la excepción de legitimación pasiva opuesta por la demandada, sin perjuicio de lo que se establezca sobre el fondo, con el mérito de las probanzas rendidas.

**Décimo noveno:** Que, ahora bien, para determinar la procedencia de la acción en contra de Madesa, conviene determinar previamente si ésta puede considerarse empleadora de la víctima, pues sin perjuicio de tratarse de una acción civil, lo cierto es que para la determinación del estándar de debido cuidado, resulta relevante esta vinculación, pues impone obligaciones adicionales específicas, plasmadas en la legislación del ramo.

Que no existe controversia en cuanto a que el empleador directo del señor Muñoz era la empresa Polytecnia Ltda., la que a su vez fue contratada por Madesa S.A. a fin de realizar labores de pintura y desmanche en su fábrica ubicada en Quilicura, quedando pendiente dilucidar si Madesa y la víctima estaban ligadas a través de un régimen de subcontratación.

**Vigésimo:** Que el artículo 183-A del Código del Trabajo, define el régimen de subcontratación como “aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un



**Foja: 1**

trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.”

**Vigésimo primero:** Que, en el caso de marras, ha podido establecerse que el trabajador don José Arturo Muñoz Sepúlveda, prestaba servicios en razón del contrato de trabajo que ha sido acompañado por la demandada, del 24 de julio de 2015, a Empresa para la Minería, la Industria y la Construcción Ltda., también denominada Polytecnia Ltda., en virtud del cual desarrollaba las labores ya descritas para Madesa S.A., demandada de autos.

**Vigésimo segundo:** Que, de acuerdo a lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema en rol N° 29.088-14, conforme se indica en la parte final del inciso antes citado, se exige además “que la obra o el servicio sea estable y continuo, lo que denota habitualidad e ininterrupción en la ejecución o prestación”.

Que no obsta a ello el hecho de que Polytecnia, y subsecuentemente el trabajador, hayan sido contratados para efectuar una obra determinada para estimar que se trata de servicios discontinuos o esporádicos, pues la normativa laboral no establece un período mínimo de vigencia del contrato, sino que exige que durante la relación laboral, por breve que sea, se configuren la habitualidad e ininterrupción antedichas.

**Vigésimo tercero:** Que ello ocurriría respecto al señor Muñoz, por cuanto el trabajador debía cumplir con la jornada impuesta, seguir las instrucciones impartidas por la empresa principal a través de la contratista, hasta la completa ejecución de la obra, según se deriva de lo pactado en el contrato laboral, el que le exigía además dedicación en forma exclusiva, de acuerdo a la cláusula sexta.

Que una interpretación más restrictiva infringiría los principios esenciales del derecho laboral, en particular, el denominado “in dubio pro operario”, dejando en la más completa desprotección a los trabajadores que se desempeñan en obra o faena, en que la subcontratación es una forma de contratación sumamente frecuente.

**Vigésimo cuarto:** Que, como se aprecia del texto legal, en ningún caso es requisito, como pretende la demandada, que la actividad desempeñada en régimen de subcontratación pertenezca al giro de la empresa principal, correspondiente en este caso, conforme a sus dichos, a la fabricación de autoadhesivos industriales; pues bajo este entendido, se restringiría la aplicación de la norma al punto que ésta carecería de relevancia práctica. Ciertamente, para desarrollar el giro de la empresa, ésta preferentemente contrata a los trabajadores que requiere para ello en forma directa, sin perjuicio de poder externalizar algunas tareas concretas. Si bien, es posible que la empresa principal subcontrate labores propias de su giro, lo más frecuente es precisamente que encargue a terceros las que son ajenas a éste. Así se desprende, por ejemplo, del Ord. N° 2468/053 del año 2007 de la Dirección del Trabajo, la que se pronuncia en el sentido de aclarar que es posible subcontratar actividades propias del giro, cuestión que no sería necesario precisar de no ser porque la subcontratación se utiliza principalmente para tareas fuera del giro, cuya legitimidad además no es cuestionada.



Foja: 1

**Vigésimo quinto:** Que el régimen de subcontratación busca resguardar los derechos de los trabajadores que prestan servicios a la empresa principal a través de contratistas, los que por lo general son pequeñas y medianas empresas, cuyo capital muchas veces es insuficiente para responder frente a las infracciones laborales cometidas contra los empleados, lo que la legislación repara al establecer claramente la existencia de un vínculo laboral entre la empresa principal y el trabajador, precisando además las obligaciones que corresponden a ésta, así como las que son directa responsabilidad del contratista. Esta imposición a la empresa principal no es antojadiza, sino que se fundamenta, por un lado, en que el trabajador se encuentra, en la práctica, sujeto a subordinación y dependencia respecto de ésta, y por otra parte, en que el beneficio de su labor corresponde no sólo a la contratista, sino también a la mandante.

**Vigésimo sexto:** Que, en este orden de ideas, esta Magistratura discrepa de lo resuelto por la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana en Sumario Sanitario rol N° 3461-2015, en que se sobreseyó a Madesa S.A. por cuanto estima que el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad sólo es exigible cuando la realización de las obras, faenas o servicios, sean propios de su giro, sin aportar otros argumentos que respalden su decisión, exigiendo un requisito adicional a los contemplados por los artículos 183-A y 183-E del Código del Trabajo.

Que cabe señalar que, a su vez, el Decreto Supremo N° 76 del año 2007, reglamento relativo al artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, en su artículo 1°, señala que es aplicable “[...] para aquellas empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, así como para sus empresas contratistas y subcontratistas”, mientras el artículo 3° del Decreto Supremo N° 594, indica que: “La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella.”

Que, por lo tanto, esta alegación de la demandada debe descartarse, por carecer de todo sustento jurídico.

**Vigésimo séptimo:** Que, asimismo, la propia demandada reconoció a Polytecnia Ltda. como empresa contratista, otorgándole tal calificación en el documento denominado “Autorización de trabajo”, consignando las exigencias de seguridad y medio ambiente aplicables, así como lo tratado en la reunión de pre-trabajo, realizando además la evaluación de riesgos propios y la identificación de peligros, según consta en los documentos respectivos, por lo que resulta incomprensible que Madesa pretenda ahora desconocer el vínculo de subordinación que sí estableció en la práctica. De lo contrario, no se comprende el nivel de injerencia de la empresa en las actividades que encargó a Polytecnia.

**Vigésimo octavo:** Que habiendo despejado la cuestión planteada, y siendo evidente el régimen de subcontratación que se estableció entre Madesa y don José Arturo Muñoz Sepúlveda, cabe abocarse a analizar si la demandada cumplió con las obligaciones que le eran exigibles, y si éstas incidieron en el desenlace fatal, conforme al tercer punto de la interlocutoria de prueba.

**Vigésimo noveno:** Que, al respecto, la Dirección del Trabajo, por medio de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, en resolución N° 1371/15/82, acompañada por los demandantes, sancionó a Madesa S.A. por “no confeccionar la empresa principal un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas”, no sólo reconociendo la existencia de un régimen de subcontratación en el presente caso,



**Foja: 1**

sino además estableciendo la infracción del artículo 183-E inciso primero del Código del Trabajo, en relación con los artículos 11 del Decreto Supremo N° 76, artículo 66 bis de la Ley N° 16.744 y artículos 184 y 506 del Código del Trabajo.

**Trigésimo:** Que las pruebas aportadas al juicio por Madesa no han logrado desvirtuar lo dictaminado por la autoridad administrativa pertinente, pues si bien la demandada ha allegado diversos documentos, tales como el reglamento interno de la empresa, charlas preventivas o las actas del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que dan cuenta de su cumplimiento de las obligaciones laborales, lo cierto es que éstas dicen relación con sus empleados directos, y no se refieren a los contratistas y subcontratistas, por lo que carecen de relevancia para estos autos.

**Trigésimo primero:** Que contribuye a este aserto el Formulario de Investigación de Accidentes de Madesa, que forma parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público, en que la empresa establece con alta prioridad la adopción de diversas medidas de control, que dan cuenta de la inexistencia de éstas con anterioridad al accidente, pues de lo contrario, sería innecesaria dicha proposición. Así, se señala que para futuros trabajos, se utilizarán andamios o alza hombres tipo Genie, caso en el que se eliminarán las vigas metálicas que puedan suponer riesgo de aprisionamiento; que asimismo, de utilizarse grúa se exigirá registro de capacitación sobre su uso seguro, y verificación de experiencia previa del operario, y si se emplea andamio, se capacitará conforme al manual de la Cámara Chilena de la Construcción; se asegurará la supervisión permanente durante toda la faena; y se realizará breve charla previa a cada jornada, relativa a las tareas a realizar y sus riesgos.

**Trigésimo segundo:** Que incluso si la demandada hubiese acreditado que contaba con el reglamento para contratistas y que ya contaba en esa fecha con las medidas que, según se constata, adoptó a partir del accidente, el hecho mismo del accidente evidencia su insuficiencia, lo que infringe igualmente las exigencias de la legislación laboral.

Que, en este sentido, el fallo antes referido de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, expone en su considerando décimo quinto, que “[...] Se trata de una obligación directa, positiva, que importa adopción de medidas, sistemas y procedimientos, como asimismo, su vigilancia efectiva con miras a proteger la vida y la salud de todos los trabajadores, sean directos, o de empresas contratistas o subcontratistas.” Esto implica, por ejemplo, y como agrega más adelante la sentencia citada, que la empresa principal se cerciorara de que el reglamento fuera difundido e internalizado por los trabajadores, y que fiscalizara su cumplimiento.

Que, en síntesis, la exigencia legal y reglamentaria no se agota en la sola realización de una capacitación relativa a un procedimiento de trabajo seguro y demás elementos de seguridad, sino que requiere que todas las medidas adoptadas sean efectivas, logrando así que los trabajadores adviertan e interioricen la existencia de los riesgos asociados a su labor, lo cual no sucedió en la especie.

**Trigésimo tercero:** Que para que el hecho u omisión de una persona capaz de delito o cuasidelito civil imponga responsabilidad civil, no basta que haya sido ejecutado con dolo o culpa y que haya producido un perjuicio. Se requiere además que ese daño sea una consecuencia de ese dolo o culpa, es decir, que exista una relación de causalidad entre esos elementos, requisito que está contemplado en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, al exigir el legislador, para la procedencia de la obligación de indemnizar a quien ha cometido un delito o cuasidelito civil, que se haya “inferido daño a otro” y que el daño pueda “imputarse” a esa malicia o negligencia.



Foja: 1

Que así, “un delito o cuasidelito civil obliga, por tanto, a la indemnización cuando conduce a un daño, cuando éste es su resultado, cuando el daño se induce de él, cuando el daño puede atribuirse a la malicia o negligencia de su autor”. (Arturo Alessandri Rodríguez, De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Primera Edición (reimpresa), Editorial Jurídica de Chile, 2011, pág. 174).

Que, en consecuencia, habrá relación de causalidad cuando el hecho o la omisión dolosa o culpable sea la causa directa y necesaria del daño, de modo que sin él, el daño no se habría producido.

**Trigésimo cuarto:** Que atendidas las circunstancias en que se produjo el deceso de don José Arturo Muñoz Sepúlveda, que fueran asentadas en el considerando décimo quinto, las deficiencias atribuibles a Madesa tuvieron incidencia directa en lo ocurrido, no sólo por la verificación de culpa infraccional, hecho que fue plenamente establecido y sancionado en su oportunidad por la Inspección del Trabajo competente, sino también desde el régimen común de responsabilidad civil extracontractual.

**Trigésimo quinto:** Que, aun prescindiendo de las obligaciones que impone la normativa laboral, e incluso reconociendo las medidas que sí fueron adoptadas por la demandada en torno a la obra, a las que ya se ha hecho referencia, éstas demostraron ser insuficientes atendido el resultado dañoso.

Que no puede prescindirse de la circunstancia que la víctima realizaba sus labores en dependencias de la demandada, quien por lo tanto estaba al corriente de las condiciones en que desempeñaba su trabajo, permitiendo a pesar de ello que los operarios se desempeñaran sin supervisión del respectivo encargado de obra durante varios minutos, lo que posibilitó que ocurriera el accidente y además impidió una pronta reacción que quizás podría haber evitado el terrible desenlace.

Que, asimismo, no se cercioró, más allá del documento que certifica la capacitación en el uso de la maquinaria, que el trabajador se encontrara correctamente instruido acerca de su utilización, riesgos y reacción frente a posibles desperfectos.

Que, además, dependía exclusivamente de Madesa la decisión de cortar las vigas metálicas del techo a fin de ampliar el espacio y disminuir el riesgo de accidentes, o bien, optar realizar la tarea con ayuda de andamios, atendida la presencia de estos elementos.

**Trigésimo sexto:** Que incluso sin norma expresa que imponga estos deberes, éstos pueden derivarse del rol de garante que corresponde a la empresa principal, no sólo como empleadora desde la perspectiva laboral, sino también como contratante de los servicios en materia civil, por cuanto dichas decisiones, imputables únicamente a ella, aumentan los riesgos propios de la actividad que se desarrollaba, al no prever que la omisión de estas medidas podría causar un accidente letal.

Que, en este sentido, el Formulario de Inspección N° 0338792 de la Asociación Chilena de Seguridad, que contiene las conclusiones derivadas de la inspección practicada a Madesa tras el accidente, dan cuenta de estas deficiencias y de la necesidad de corregir dichos aspectos a fin de prevenir accidentes similares.

**Trigésimo séptimo:** Que, por ende, resulta efectivo que la demandada incumplió los deberes de seguridad que le correspondían con respecto a la víctima, sin perjuicio de los incumplimientos que sean imputables al empleador directo y que no son materia de autos.

**Trigésimo octavo:** Que en lo que respecta a la existencia de daños y perjuicios reclamados por la demandante, a los que hace referencia el cuarto punto de la



**Foja: 1**

interlocutoria de prueba, en específico el daño moral, hay que tener presente que éste se ha conceptualizado como como el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos.

Que el contenido del concepto abarca no sólo las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, sino que además quedan comprendidas las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida.

Que por ello, es que considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial, no solo por el dolor o sufrimiento que se padece, pues -también cabe apuntar- la visión reduccionista del daño moral que antaño imperó en la jurisprudencia ya ha sido superada, asentándose en la actualidad que el daño extrapatrimonial protege más allá incluso del *pretium doloris*, que es sólo una especie del mismo. Así, si la víctima ha sufrido un daño corporal (biológico-fisiológico y estético) o un daño a la dignidad humana o a otros derechos de la personalidad, debe ser indemnizada por daño moral, (Marcelo Barrientos Zamorano. Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del *pretium doloris*. Rev. Chilena de Derecho, Abr. 2008, Vol.35, N°1, p. 85-106. ISSN 0718-3437).

**Trigésimo noveno:** Que no obstante la prueba rendida, es oportuno recordar que en su obra Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, N° 384, don Arturo Alessandri Rodríguez reflexiona en el sentido que la prueba será fácil cuando el demandante sea el cónyuge o un pariente muy próximo al difunto. El vínculo citado o el parentesco indicado harán presumir la efectividad de ese dolor, a menos que se demuestre lo contrario, como por ejemplo, tratándose de cónyuges, que estaban divorciados o tenían malas relaciones.

Que este mismo razonamiento han seguido los tribunales, según puede revisarse en la revista Fallos del Mes N° 301, página 765, y así como también en la sentencia de la Excm. Corte Suprema recaída en la causa rol N° 12.048-2013, en el sentido que “el vínculo de parentesco hace suponer la depresión, dolor o angustia en que se traduce el daño moral invocado”. Con ocasión del fallo recién citado, el Máximo Tribunal concluyó que “lo antes razonado, guarda relación con un principio probatorio elemental en materia civil, que es el denominado principio de la normalidad, según el cual quien alega lo normal, lo corriente, lo común, lo ordinario, no tiene el peso de la prueba, el que recae sobre la parte que hace valer lo anormal, excepcional o extraordinario”.

**Cuadragésimo:** Que en relación a los perjuicios causados, la prueba pericial rendida resulta contundente en cuanto a establecer que los padres del fallecido presentan en la actualidad trastornos psiquiátricos derivados directamente de la trágica e inesperada muerte de su hijo, que en el caso del padre se manifiesta en un episodio depresivo mayor, mientras que en el de la madre, en un trastorno ansioso-depresivo, reacciones producto de sus diversas características de personalidad e historia de vida, que les han llevado a enfrentar el duelo de distinta forma, repercutiendo además en su relación de pareja; situación además ha sido corroborada por los testimonios rendidos en autos.

**Cuadragésimo primero:** Que en el caso de los hermanos de la víctima, los testigos de la demandante se encuentran contestes en señalar que éstos se han visto fuertemente afectados por lo ocurrido, ya que además de la tristeza por la pérdida de su hermano, lo que ha generado un cambio conductual evidente, todos declaran que se trataba de una familia muy unida y alegre, mostrándose ahora apesadumbrados y asediados por el constante recuerdo de don José Arturo, alterando radicalmente la dinámica familiar.





Foja: 1

**Cuadragésimo segundo:** Que en relación a los hijos de la víctima, la testigo doña Susana Saunders González, declara que “no son los mismos que eran antes”, indicando expresamente que hace referencia a los padres, hermano e hijos del difunto, mientras doña María Elena Salazar Falcón señala que “a todos les afectó”, pudiendo considerarse dentro del grupo familiar a los hijos, como se desprende del mismo hecho que éstos han demandado conjuntamente con su familia paterna, lo que denota la existencia de una relación cercana con dichos parientes, permitiendo presumir a su vez un vínculo estable con su padre fallecido.

Que, asimismo, del informe pericial practicado a los padres de la víctima y abuelos de los menores, éstos hacen referencia a que su nieto Tomás les recuerda constantemente a su hijo muerto, dado el parecido físico entre ambos, agregando que el niño ha empezado a llamar “papá” al abuelo paterno, antecedentes que contribuyen a este aserto.

**Cuadragésimo tercero:** Que tratándose de menores de edad no sólo a la fecha del accidente, sino incluso al momento de dictarse esta sentencia, su situación es la que supone mayor vulnerabilidad frente a la muerte de su progenitor, atendida su obvia dependencia emocional y material respecto de éste, hecho que resulta natural y obvio del parentesco que los liga y para el cual resulta absolutamente indiferente que al momento de la muerte no hayan residido con él.

Que, a mayor abundamiento, el cambio en la dinámica familiar, referente a la actitud de sus parientes cercanos, circunstancia que se encuentra plenamente acreditada, repercute necesariamente en la esfera emocional de los niños, siendo también a consecuencia de la muerte de don José Arturo Muñoz Sepúlveda.

**Cuadragésimo cuarto:** Que, de acuerdo al artículo 2314 del Código Civil, “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización de los perjuicios, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”

Que por ello, y en relación al requisito de la capacidad de la demandada, vale expresar que no existe impedimento alguno para que a las personas jurídicas -como la demandada- se les pueda reprochar la producción de daños susceptibles de ser reparados civilmente por ellas.

Que la doctrina ha sostenido que los órganos, representantes y dependientes de una persona jurídica pueden causar daños a terceros por dos vías: mediante acuerdos y decisiones o en razón de la deficiente adopción de medidas organizativas necesarias para evitar los riesgos de accidentes. En este sentido, "la empresa, no sólo para fines laborales, sino también de responsabilidad civil, es una organización de medios personales, materiales e inmateriales que exige de procedimientos idóneos para evitar accidentes en el desarrollo de su actividad. Lo peculiar de la responsabilidad civil por culpa en la organización reside en la condición de que la conducta de la empresa debe haber infringido un deber de cuidado, establecido en la ley, los usos normativos o por el juez, en consideración de la conducta que se puede esperar de la organización empresarial, atendidas las circunstancias. En otras palabras, la culpa radica en el incumplimiento de una expectativa de comportamiento, cual es, la conducta de la organización empresarial que la víctima tenía derecho a esperar." (Barros Bourie, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile, reimpresión de la primera edición, junio de 2014, Pág. 196).



Foja: 1

Que ello es lo que precisamente ha sucedido con Madesa S.A., quien en su calidad de empleadora del señor Muñoz debía asumir una conducta que, como se ha reflexionado, no satisfizo.

**Cuadragésimo quinto:** Que, por último, y conforme a lo tocante al quantum indemnizatorio, habiéndose establecido la existencia de perjuicios de carácter moral respecto de los demandantes, corresponde determinar su monto, debiendo tenerse presente que resulta imposible determinar el valor de la vida de una persona, como asimismo cuantificar el dolor que a consecuencia de la muerte de la víctima han sufrido la actora, por lo que únicamente cabe hacer una evaluación prudencial de los mismos, para lo cual se considerará que a consecuencia del accidente laboral se ha afectado el bien jurídico más relevante que la Constitución Política de la República garantiza a toda persona, en el artículo 19 N° 1 de dicho texto, como asimismo que dicha afectación es irreversible, considerando además la cercanía del parentesco de cada demandante con el occiso, la edad de los demandantes y la del propio operario.

Que en razón de lo anterior, y considerando por otra parte que la naturaleza de la indemnización debe ser de carácter reparatorio, pero no lucrativo, resulta que los montos solicitados en el libelo resultan evidentemente excesivos, por lo que se fijará una indemnización por concepto de daño moral de \$20.000.000.- respecto de cada padre, \$8.000.000.- para cada uno de los hermanos y de \$35.000.000.- para cada hijo, suma que deberá enterarse de manera reajustada y que devengará intereses a favor de la demandante desde que la presente sentencia cause ejecutoria y hasta el día de su pago efectivo.

**Cuadragésimo sexto:** Que, de esta forma, han resultado establecidos en el proceso, tanto el actuar negligente de la demandada, como la existencia de perjuicios para la demandante que son imputables causalmente a dicha acción, por lo que concurren en la especie todos los requisitos para la procedencia de la responsabilidad civil extracontractual, por lo que habrá de acogerse la demandada de autos en lo que a ella se refiere.

**Cuadragésimo séptimo:** Que así, resultando la demandada responsable de un cuasidelito civil, es obligada a la indemnización de los daños ocasionados a la demandante, resultando obligada al pago de la suma total de \$126.000.000.- a favor de los demandantes, suma que deberá enterarse debidamente reajustada de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se efectúe el pago efectivo.

**Cuadragésimo octavo:** Que la demás prueba rendida en nada altera lo decidido.

**Cuadragésimo noveno:** Que se condenará en costas a la demandada, por haber resultado completamente vencida.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 346, 383, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, 1698, 1702, 1706, 2314, 2329 y siguientes del Código Civil, 183-A y siguientes del Código del Trabajo, y demás normas pertinentes, se declara que:

I.- Se rechaza la tacha deducida en contra de doña Susana María Saunders González, sin costas.

II.- Se acoge la tacha en contra de don Jorge Alejandro González Sánchez, sin costas.

IV.- Se acogen las tachas del N° 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, en contra de los señores Carolina Rigol Olsen, Pedro Alfonso Tapia Gavidia y



«RIT»

Foja: 1

Liliana Karen Varas Tapia, y se rechazan las basadas en el numeral 6° del artículo citado respecto a los mismos testigos; sin costas.

V.- Se acoge la demanda impetrada a fojas 1, en cuanto se condena a la demandada Madesa S.A., a pagar las siguientes sumas, que deberán enterarse de manera reajustada y que devengarán intereses a favor de los demandantes desde que la presente sentencia cause ejecutoria y hasta el día de su pago efectivo:

- a) A don Aliro Muñoz Marchant y doña Clara Sepúlveda Osorio, la suma de \$20.000.000.- para cada uno.
- b) A los señores Olga, Jennifer y Christopher, todos de apellidos Sepúlveda Osorio, la suma de \$8.000.000.- para cada uno.
- c) A los menores Tomás Muñoz Ravelo y Catalina Muñoz Ramírez, la suma de \$35.000.000.- para cada uno.

VI.- Que se condena en costas a la demandada por haber resultado enteramente vencida.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1177-2016.-

Dictada por doña Andrea Coppa Hermosilla, Juez Suplente del 23° Juzgado Civil de Santiago.

Autorizada por don Patricio Corvalán Cambor, Secretario Subrogante del 23° Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dieciocho de Octubre de dos mil diecisiete**

